



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI  
Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS  
E.S.D

<b>Radicación:</b>	76001-33-33-004-2017-00193-00
<b>Medio de control:</b>	Reparación directa
<b>Demandante:</b>	Luisa Fernanda Girón Murillo y otro
<b>Demandado:</b>	Distrito de Santiago de Cali
<b>Acto procesal:</b>	Recurso de apelación contra sentencia de primera instancia

Respetuoso saludo,

CAROLINA OCAMPO FRANCO, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.130.617.507 expedida en Cali (Valle), abogada en ejercicio con tarjeta profesional número 206.061 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI conforme al poder otorgado; por medio del presente, de manera respetuosa interpongo **RECURSO DE APELACIÓN** contra la sentencia de primera instancia del 31 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali dentro del proceso de la referencia, notificada a través de mensaje enviado al buzón electrónico de la entidad el día 09 de febrero de 2023.

### I) OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

El numeral 1º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, establece que el recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia, deberá interponerse y sustentarse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, dispone que la notificación personal “***se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje***”.

La sentencia del asunto, fue notificada al correo dispuesto por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI para recibir notificaciones judiciales, el día viernes 9 de febrero de 2024; en consecuencia, el término para presentar el recurso empezó a contar a partir del martes 13 de febrero, y por lo tanto, se interpone dentro del término señalado en la norma.

### II) SÍNTESIS DEL LITIGIO

A través de este medio de control, se pretende la declaratoria de responsabilidad administrativa del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, por los perjuicios sufridos en ocasión a un accidente en el que resultó lesionada la señora LUISA FERNANDA GIRÓN MURILLO el 13 de mayo de 2016, mientras conducía una motocicleta sobre la calle 70 frente a la nomenclatura 11C con 89 y presuntamente se cayó por el mal estado de la vía.

### III) LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El *a quo* profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la responsabilidad administrativa del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, por considerar probada una falla en el servicio respecto al deber de mantenimiento de la malla vial que le asiste; sin embargo, por encontrar acreditada la existencia de concausa, redujo el quantum indemnizatorio.

En consecuencia, condenó a mi representada a indemnizar a los demandantes por los **perjuicios inmateriales** en la modalidad de daños morales y daño a la salud, y a los **perjuicios patrimoniales** correspondientes a lucro cesante consolidado y futuro.

Los porcentajes y montos fijados por el Juez se transcriben a continuación:

(...)

*“SEGUNDO. – En consecuencia, CONDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali, a pagar a los demandantes a título de perjuicio moral las siguientes sumas de dinero:*

DEMANDANTE	S.M.L.M.V
Luisa Fernanda Girón Murillo	48
Iván Girón Vásquez	48
Carmen Rosa Murillo Ballesteros	48

*TERCERO. – CONDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali, a pagar por daño a la salud, para la señora Luisa Fernanda Girón Murillo el equivalente a 48 SMLMV.*

*CUARTO. – CONDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali, a pagar a la señora Luisa Fernanda Girón Murillo a título de Lucro Cesante las siguientes sumas de dinero:*

Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Total lucro cesante
\$33.503.703,28	\$57.301.740,16	\$90.805.443,44

*QUINTO. – NEGAR las demás pretensiones.*

*SEXTO. – La entidad llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., deberá reembolsar a la entidad demandada, las sumas a las que fue condenada, en los términos de la póliza vigente aquí mencionada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.*

*SÉPTIMO. – NO CONDENAR al pago de costas, por las razones expuestas.” (...)*

### IV) SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

#### • LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO-NEXO CAUSAL

Los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio son: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral que debe ser cierto



y determinado; ii) una conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) **el nexo causal entre ésta y aquél**, es decir, que **el daño se produjo como una consecuencia directa** de la acción u omisión atribuida a la entidad demandada.

En abundante jurisprudencia, el Consejo de Estado<sup>1</sup> ha sostenido que: *“la sola demostración del mal estado de la vía, no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la **acreditación del nexo causal entre éste y la acción u omisión** en que pudo haber incurrido la Administración en su deber de mantenimiento de la malla vial<sup>2</sup>”*.

Lo anterior, requiere entonces que el demandante pruebe las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y, tratándose de accidentes de tránsito, además es necesario que el juez del proceso valore la conducta de la víctima y su injerencia en la producción del daño, máxime, cuando ésta se encontraba ejecutando una actividad altamente peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta.

En esta litis, el juez de primera instancia concluyó que el accidente en el que resultó lesionada la señora LUISA FERNANDA GIRÓN MURILLO, fue producido por un hueco en la vía, que generó que ésta perdiera la estabilidad de su motocicleta y cayera. Igualmente, al valorar la conducta de la víctima, encontró probado que ésta participó de manera activa en el accidente en que resultó lesionada, pues al conducir por el lado izquierdo de la vía, contravino lo establecido en el artículo 94 del Código de Tránsito.

A juicio de esta orilla procesal, el *a quo* se equivocó al determinar la configuración de concurrencia de culpas, pues del material probatorio se observa que la conducta de la víctima no solo tuvo injerencia en la producción del daño, sino que fue **determinante**, como se explicará a continuación.

El juez de primera instancia, dio plena credibilidad a la **HIPÓTESIS** consignada por el agente de tránsito en el Informe Policial de Accidente de Tránsito-IPAT aportado por la parte actora en la cual, atribuyó el hecho al código 306 “huecos”; pues, según él, dicha hipótesis concuerda con la versión de la víctima y de dos testigos (amigos de la demandante) que afirmaron haber sido testigos presenciales del hecho.

Frente al particular, es menester recordar que un Informe Policial de Accidente de Tránsito, conforme lo señala el artículo 144 inciso primero de la Ley 769 de 2002, es un informe meramente descriptivo, que debe contener información sobre el estado de la vía, la huella de frenada, el grado de visibilidad, entre otros aspectos.

Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que un IPAT, a pesar de ser un documento público que demuestra la ocurrencia de un accidente, la fecha, hora, y las partes involucradas; **constituye un mero indicio**, es una conjetura, suposición o **hipótesis** que

---

<sup>1</sup> Ver, entre otras:: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 11 de mayo de 2006, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, expediente No. 15042 / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 08 de febrero de 2017, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN, expediente 38432.



requiere de otros medios de prueba para su valoración,<sup>3</sup> por lo tanto **el solo IPAT, que además se realiza de manera posterior al accidente y con base en la narración de los hechos que hace la propia víctima, no es suficiente para acreditar la causa eficiente del daño.**

En similar sentido, la Corte Constitucional en sentencia T 475 de 2018, señaló:

*“El marco normativo y el manual<sup>4</sup> permiten establecer **que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo.** Este informe, a su vez, **tiene unos criterios de evaluación propios**, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. **Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo.** Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas. (...)”<sup>5</sup> Subrayas y negrillas propias.*

Llama la atención del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, cómo el Juez acreditó dicha hipótesis que **no fue ratificada por el agente de tránsito,** solamente contrastándola con la narración que realizó la propia víctima del accidente, y de dos amigos suyos que manifestaron haber sido testigos presenciales del hecho, sin que en el acápite del IPAT correspondiente a los testigos, se hubiere consignado alguno.

Honorables Magistrados, por supuesto que la versión de la víctima concuerda con la narración que ella misma hizo de los hechos, y que sus amigos, que manifestaron haber sido testigos del hecho, sin haber quedado registrada su presencia en el IPAT, tienen intereses directos en las resultas del proceso que afectan su imparcialidad, situación que debió haber sido analizada por el *a quo*.

Los “testigos”, afirmaron en la audiencia de pruebas que la demandante conducía a una velocidad aproximada de 40 o 50 kilómetros, sin que alguno de ellos cuente con la experticia que les permita determinar ese hecho; sin embargo y dada la plena credibilidad que le dio el Despacho a su versión, es claro entonces que la víctima no solamente contravino la disposición contenida en el artículo 94 del Código de Tránsito, sino también el límite de velocidad contemplado en el artículo 106 ibidem para transitar por zonas residenciales, por lo que se concluye que **la conducta de la víctima fue determinante y exclusiva en la producción del daño** como pasará a sustentarse en el siguiente punto.

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia del 11 de octubre de 2018, radicación número: 68001-23-31-000-2008-00298-01(45661).

<sup>4</sup> Se refiere a la Resolución 11268 de 2012 “Por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), su Manual de Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones”.



- **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA**

Para valorar la conducta de la víctima, además de la hipótesis que consigna el agente de tránsito en el IPAT, deben analizarse, entre otros aspectos, las características del lugar y de la vía, pues de esta forma es factible advertir posibles infracciones a las normas de tránsito, como las que se pueden concluir en este caso. En el IPAT se observa lo siguiente:

**4. Fecha y hora de ocurrencia:** 13 de mayo de 2016 18:45 pm.

**6. Características del lugar:**

6.1. Área: Urbana

6.2. Sector: **Residencial**

**7. Características de las vías:**

En primer lugar, se observa en el IPAT que el sector en que ocurrió el accidente está catalogado como **residencial**, por lo que a la luz del artículo 106 de la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito” que establece los límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales, la demandante debía conducir a una **velocidad máxima de treinta (30) kilómetros por hora**.

Según lo consignado en el IPAT, se refleja en el croquis una “Huella de Arrastre Metálico” igual a **21,81 metros**, lo que permite inferir que alguien que conduzca a menos de 30 kilómetros por hora y pierda el control de su vehículo por cualquier obstáculo en la vía, no termina desplazado a tal distancia, por lo que se puede concluir que **la víctima estaba conduciendo a una velocidad mayor a la permitida**.

Por otra parte, está probado que la demandante **no conducía por el lado derecho de la vía** y a una distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla, tal como lo establece el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito; pues venía conduciendo por el lado izquierdo y el obstáculo en la vía se encontraba en la mitad, razón por la cual, es claro que de haber transitado por el lado correspondiente, jamás se hubiese topado con ningún obstáculo en la vía.

El Consejo de Estado, en sentencia del 7 de diciembre de 2021<sup>6</sup>, REVOCÓ una sentencia de primera instancia, en la cual se había condenado al municipio de Villavicencio por un accidente de tránsito, ocasionado por una presunta omisión en el deber de mantenimiento y conservación de las vías del ente territorial. Concluyó la alta corporación:

*“Temas: ACCIDENTE DE TRÁNSITO - No se demostró que la falta de mantenimiento de la vía por la presencia de huecos y la falta de señalización constituyeran las causas eficientes del accidente de tránsito / CULPA DE LA VÍCTIMA - La causa necesaria o determinante de la colisión fue la imprudencia del conductor de la motocicleta, al no acatar la señal de pare y no respetar la prelación de la vía.*

(...)

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera ponente: MARIA ADRIANA MARÍN, providencia del 7 de diciembre de 2021, radicación número: 50001-23-31-000-2009-00300-01 (61309)





*En este contexto, para la Sala es manifiesto que aún cuando de las pruebas se deduce que la vía donde ocurrió el accidente de tránsito estaba en mal estado, por la presencia de huecos, esa circunstancia no determinó la producción del daño, en atención a que su causa eficiente fue la imprudencia del señor Hugo Alexander Sánchez Florido quien, se itera, omitió la señal de pare que lo obligaba a detener la marcha para dar prelación a quien lo hacía por la otra vía con la que hacía intersección, conducta omisiva que impidió que observara con suficiente antelación el taxi contra el que colisionó; luego, en este caso, era únicamente la víctima la que se encontraba en la posibilidad efectiva de interrumpir el proceso causal de ese incidente; sin embargo, con su actuación imprudente asumió el riesgo propio de la ocurrencia del siniestro vial que finalmente aconteció.*

*En tales condiciones, se debe concluir que en el presente caso se deberá revocar la sentencia de primera instancia y, por ende, negar las pretensiones de la demanda, por la configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. (...)*

De lo dicho hasta ahora, es evidente que en este caso se configura en favor de mi representada, la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

- **FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS**

Si bien al configurarse la causal de eximente de responsabilidad señalada se debe revocar la sentencia en su totalidad, en el evento de considerar insuficientes los argumentos expuestos; se solicita al honorable Tribunal Contencioso Administrativo DISMINUIR el quantum indemnizatorio, pues no solo la accionante transgredió el Código de Tránsito al no transitar por el carril derecho, sino que también violó los límites de velocidad permitidos para una zona residencial, por lo que la reducción solamente de un 20% de las condenas, resulta a todas luces desproporcionada al evaluar la conducta imprudente de la víctima.

- **Lucro cesante.**

El Consejo de Estado ha concebido el lucro cesante como: “La **ganancia frustrada** o el **provecho económico que deja de reportarse** y que, **de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima**, pero que, como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, **debe ser cierto**, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna”<sup>7</sup>.

Se tiene entonces, que para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante, se debe probar no solo su existencia, sino la relación directa con el daño causado. Ha dicho el Consejo de Estado que, para que el perjuicio se considere existente “**debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública**”<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, , sentencia de 18 de julio de 2019, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 44.572.

<sup>8</sup> Ibidem.



ALCALDÍA DE  
**SANTIAGO DE CALI**  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En este proceso, no está probado que la demandante, **con ocasión al accidente** esté en una imposibilidad total de desarrollar su profesión u oficio ni tampoco que perdió una oportunidad cierta de percibirlos.

**V) PETICIÓN**

Así las cosas, por considerar que en este litigio se configuró la causal eximente de responsabilidad de CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA; solicito respetuosamente al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Cuarto Administrativo Oral, y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda.

De manera subsidiaria y en el evento de confirmar la decisión del *a quo* en cuanto a la declaratoria de responsabilidad, solicito de manera respetuosa valorar la conducta imprudente de la víctima y REDUCIR LA INDEMNIZACIÓN (por todo concepto), de manera proporcional a la participación de ésta en la producción del daño.

**VI) ANEXOS**

- Poder

**VII) NOTIFICACIONES**

El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI las recibirá en el correo: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co)

La suscrita apoderada, las recibirá en el correo: [carolina.ocampo.fr@gmail.com](mailto:carolina.ocampo.fr@gmail.com)

Cordialmente,

CAROLINA OCAMPO FRANCO

T.P No. 206.061 del C.S.J

Apoderada Distrito Especial de Santiago de Cali

[carolina.ocampo.fr@gmail.com](mailto:carolina.ocampo.fr@gmail.com)

(Con copia a todos los sujetos procesales)